

Panamá: Las exequias del Torrijismo

Gregorio Selser

Gregorio Selser: Escritor y periodista argentino. Profesor e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Editorialista internacional y autor de numerosos libros sobre historia política y social de países de América Latina.

Desde el momento mismo en que el declinante Partido Revolucionario Democrático (PRD), creado por el general Omar Torrijos en 1978 con el fin de dar una estructura civilista y política a lo que hasta ese momento no había sido sino una expresión lateral de su poder personal y el de un grupo adicto dentro de la entonces llamada Guardia Nacional, resolvió patrocinar la candidatura del doctor Nicolás Ardito Barletta a la presidencia de la República, los observadores y analistas coincidieron en la apreciación de que se consagraban las exequias del torrijismo, sin estridencias ni alharacas, y sin que los funerales fuesen visibles o taxativos.

Esa admisión partía desde dentro del aparato político que se había estado readaptando periódicamente a las cambiantes contingencias internas, no menos que a las impuestas desde afuera por excipientes tales como los derivados de la guerra civil salvadoreña y del hostigamiento y agresión - francos o solapados - a Nicaragua. Desde que Panamá integra el movimiento de países no alineados y continúa participando activamente del Grupo de Contadora, de algún modo su política exterior se ha distinguido por su relativa independencia, respecto del resto de los países del istmo centroamericano, deslindando Nicaragua aunque en otros aspectos; pero además, el PRD mismo está vinculado a la Internacional Socialista (IS) y al conglomerado pluralista de partidos políticos latinoamericanos conocidos como COPPPAL, con sede en México.

No por discutidos los resultados de la elección que consagró presidente a Ardito Barletta debe marginarse la reflexión de que se trató de comicios muy reñidos, donde la ausencia del carismático líder militar no hizo más que ratificar la evidencia de que era su figura y su personalidad las que habían llenado el ámbito político local desde el golpe de estado el 11 de octubre de 1968. El vacío dejado luego de su muerte intempestiva no lo cubrían ni el PRD ni heredero alguno, sobre todo surgido del riñón militar, que dígase lo que se dijere sigue siendo la máxima instancia del poder doméstico. El detalle de que el único candidato posible de respaldo, para

la estructura del PRD, haya sido Ardito Barletta es un contundente indicador de las limitaciones y decaimientos del torrijismo postorrijos.

EL MAL MENOR

Entre las incongruencias de la política panameña resalta la de que, a despecho de los notorios antecedentes que vinculan al tecnócrata ex vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, su consagración presidencial fue visualizada con alivio por el espectro político que ya desde el centro liberal, progresista e independiente hasta los de la izquierda tradicional latinoamericana. Es que la opción opuesta, la del candidato Arnulfo Arias Madrid, un octogenario que durante la campaña electoral dio muestras de un alto grado de sensibilidad física y mental - desmemoria, anacronismo, confusión de conceptos, situaciones, personas y personalidades - , no dejaba duda alguna de que entre sus primeras decisiones iba a figurar la ruptura con los no alineados, con el Grupo de Contadora y, por supuesto con Cuba, con todas las consecuencias que de tales decisiones cabría deducir. Por descontado que, tal como lo dejó entrever durante su campaña, ese golpe de timón en política exterior incluiría su alineamiento más activo junto a Estados Unidos en lo que atañe a Nicaragua, y una disposición más franca a la abierta intervención en ese país con la misma disposición ideológica intemperante de que dan muestras los sectores de la derecha costarricense.

De ahí, pues, que la opción Ardito Barletta haya merecido un beneplácito y un consenso aprobatorio dentro de los sectores considerados progresistas, no porque e nuevo mandatario asigne garantías o esté en condiciones de acordarla respecto de asuntos tan urticantes como los mencionados - o de mantenimiento y de perseverancia de las líneas fundamentales de nacionalismo panameño en torno al irredento Canal de Panamá - , sino porque se estaba mucho más seguro respecto de lo que Arias Madris no iba a dejar de hacer, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones de Fort Gulick, de la United States Army School of the America (USARSA: Escuela de las Américas, del ejército de Estados Unidos) o un resucitamiento activísimo del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), del cual Panamá continúa siendo miembro desde tiempos de Torrijos. El beneplácito se deriva de la opción del mal menor, más o menos predecible, más o menos confiable. Lo contrario significaría pasar por alto la trayectoria de Arias Madrid, un furibundo fascistoide partidario de la Alemania nazi en tiempos de su primera presidencia (1940-1941), que con el transcurso del tiempo, sin dejar sus proclividades derechistas, fue orientándose hacia una irreprimida vocación pronorteamericana, cultivada con esmero durante su obligado exilio en Miami desde 1968.

UN POLÍTICO TECNÓCRATA

Si de incongruencias se trata, no lo es menos la de que el flamante presidente Ardito Barletta haya sido propagandeado durante la campaña electoral como un "torrijista cabal" y como afiliado del PRD desde sus orígenes mismos. Doctorado en economía nada menos que en la Universidad de Chicago, principal foco de las ideas monetaristas de Milton Friedman, su actuación pública como asesor de Torrijos y más tarde como funcionario del Banco Mundial está asociada a la de los fríos tecnócratas de la deshumanizada burocracia internacional de las grandes finanzas. De hecho, a él le debe Panamá desde tiempos de Torrijos su conversión en centro financiero internacional y refugio transitorio de cuantiosos volúmenes de capitales de más bien desconocidos ahorristas - personas, compañías, corporaciones transnacionales, grupos bancarios - que se valen de su legislación benévola para sus operaciones que en general buscan la discreción y el anonimato, del mismo modo que los modelos hermanos de Gran Caymán, las Bahamas y últimamente Miami.

Su asesoría es perceptible en grado no menor, en el auge que cobró el Puerto Libre de Colón merced a la misma liberalidad, lo mismo que en esa peculiar institución conocida como la de la "bandera de la conveniencia" ("flag of convenience"), una generalizada costumbre de la que se benefician las compañías navieras de toda nacionalidad o importancia - incluyendo las de Estados Unidos, Canadá y otros países altamente industrializados - que por una relativamente módica suma anual enarbolan en sus barcos la bandera de Panamá y se acogen a las leyes muy benignas de esta República para no pagar los elevados impuestos en sus países de origen, o eludir el cumplimiento de las leyes laborales o pagar peaje privilegiado en el cruce del canal. Un dato ilustrativo: mientras que a mediados de 1965 el tonelaje de la supuesta flota mercante de Panamá era de 4.465.000 TNB, y en 1975 de más de 13.000.000 TNB, hacia fines de 1983 superaba los 25.000.000 TBN.

RECUPERACIÓN HISTÓRICA

Para cuando murió Torrijos, la transición hacia la forma democrática y civilista de gobierno estaba en curso. Renunciado Arístides Royo, renunciado igualmente su sucesor Ricardo de la Espriella, le tocó al destacado jurista Jorge Illueca conducir la fase postrera del proceso torrijista, que a modo de broche de oro tendría por colofón la entrega a Panamá de las instalaciones y predios de Fort Gulick. El 1 de octubre de 1984 tiene por ello la simbolización de la recuperación de bienes propios del pueblo panameño y la ratificación de concepciones nacionalistas y patrióticas que calan muy hondo en una historia por otra parte tan llena de humillaciones e indig-

nidades que se remontan al malhadado tratado Hay-Bunau Varilla, del 18 de noviembre de 1903. El discurso del presidente Illueca es por ello una pieza memorable, además de conmovedora en su sencillez y claridad conceptual. Retornaba al pueblo de la "tierra dividida" - como llamó a Panamá el historiador Gerstle Mack - un trozo de suelo enajenado, del que Estados Unidos había hecho un uso tan ominoso y detestable, tanto como trágico para la historia de las libertades de naciones y pueblos de nuestra América. Y en la oración de Illueca que saludaba esa recuperación, el recuerdo de Torrijos, como no podía ser menos, estuvo presente y palpitante.

Diez días más tarde, Ardito Barletta sucedía en la presidencia a Illueca. Eran previsibles ciertas novedades que estaban en el aire desde las semanas previas, el 2 de noviembre el nuevo mandatario no fue avaro en la lóbrega descripción de lo que calificó: como "estancamiento económico" del país, en el anuncio de la inminente puesta en práctica de "una política muy rigurosa de austeridad y de racionalización del gasto público" y en los datos ilustrativos que cohonestaban futuros planes: "La situación de Panamá es realmente crítica - dijo - y su solución exigirá un esfuerzo de parte de todos. . . Nos acostumbramos durante largo tiempo, a consumir más de lo que el país produce y todo ello tiene que reflejarse en el alto nivel del endeudamiento público y privado, tanto interno como externo".

SOMETIMIENTO AL FMI

Las estadísticas resultaban ilustrativas. Explicó que la deuda externa ascendía a 3.5 millones de dólares, que "no estamos exagerando ni dramatizando" y que si la situación crítica no se superaba cuanto antes "podría convertirse en irreversible y traerá días aciagos, terribles para la patria".

No fue el suyo el lenguaje de un tecnócrata sino el de un político que hacía de los elementos económicos y financieros, respecto de los cuales sí es un experto, el pivote esencial de la administración que iniciaba. El opositor periódico La Prensa no demoró en asociar el diagnóstico y los pronósticos del discurso presidencial con un documento del Banco Mundial denominado "Panamá: cambio estructural y perspectivas de crecimiento" , fechado el 15 de agosto anterior, respecto del cual - afirmó - el gobierno de Ardito Barletta ya se había comprometido a cumplir como parte del programa de "ajuste estructural" elaborado por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.).

No por conocido el recetario tradicional de ese organismo resulta ocioso indicar sus principales pautas: liberación de los controles de precios, libre mercado, apertura de la economía doméstica a la competencia internacional, reducción del papel "intervencionista del Estado" y de los servicios sociales salvo los mínimos indispensables, supresión de cualesquiera trabas al sector privado y contracción de los supuestos derroches del Estado como empleador. En suma, la conocida contracción del gasto público estimado por el F.M.I., para todos los países por igual y sin distinción alguno como derroche o inversión superflua o de "rentabilidad negativa". Entre los consejos y recomendaciones inevitables, el Banco Mundial ponderó en el documento la total reforma del Código de Trabajo instaurado en tiempos de Torrijos, con el propósito de remover "los obstáculos que impiden una productividad remunerativa"; el texto postuló la "flexibilización" de la contratación y el despido de los trabajadores, con vistas a la reducción del costo salarial en las empresas y la obtención "a largo plazo" de un presunto y (al menos en los países del Tercer Mundo, incluidos los de Hispanoamérica) jamás registrado estímulo al crecimiento del empleo.

El discurso concluía con una apelación al apoyo de la llamada "iniciativa privada" (IP), locución menos urticante que la de "clase empresaria" que ha dejado de gustar a los hombres de negocios. . . y a los economistas neoliberales. La IP fue sensible al llamado presidencial al cual respaldaron públicamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), grupos de presión éstos que nuclean a cuantos factores de negocios cuentan en Panamá. Que las modificaciones al Código del Trabajo eran un atractivo para la patronal lo probó la entusiasta recepción que aquélla dispensó a la propuesta supresión de casi una treintena de artículos que para los trabajadores constituyen irrenunciables conquistas obtenidas durante largas décadas de brega sindical.

CLIMA DE AGITACIÓN SOCIAL

En la segunda quincena de noviembre el presidente Ardito Barletta se lanzó de lleno al ruedo, y agregó a la receta del F.M.I. y el Banco Mundial las primeras disposiciones ejecutivas, incluyendo el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos y el establecimiento de un gravamen del 7 por ciento a los servicios profesionales especiales. Las calificó como medidas que buscaban un saneamiento de las públicas y un equilibrio del presupuesto estatal, de cara a las negociaciones con los organismos internacionales que, entre otros objetivos, pretenden la refinanciación

de 700 millones de dólares que Panamá deberá pagar en enero de 1985 en concepto de servicios de su deuda externa.

En menos de tres días, el presidente había logrado el raro milagro de concitar en su contra, unificadamente, a la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), a la patronal (CONEP), a la Coordinadora Cívica Nacional (COCINA) que agrupa a gremios de educadores, profesionales y a agrupaciones políticas de centro y derecha. El 19 de noviembre la derechista Coordinadora Independiente de Maestros Auténticos y la ultraizquierdista Asociación de Profesores se lanzaron a un paro de más de una semana de duración en protesta por las anunciadas medidas económicas; el día 22 un comité integrado por el CONEP, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CAPAC), el Sindicato de Industriales (SIP), la derechista Asociación Médica Nacional y otras agrupaciones de profesionales, políticas y estudiantiles de oposición emplazaron al gobierno a desistir de la aplicación de sus anunciadas medidas, en un lapso de 48 horas, bajo amenaza de declarar una "huelga nacional indefinida a partir del lunes 26".

El domingo 25, por la noche, por la cadena nacional de radio y televisión, el presidente anunció que dejaba sin efecto el impuesto a los servicios profesionales especiales y su sustitución por un impuesto a los sectores de mayores ingresos, que para 1985 permitiría al Estado recaudar 55 millones de balboas (dólares). En cuanto a la congelación de salarios por dos años - que afecta a 150.000 funcionarios públicos - Ardito Barletta explicó que la medida no va a afectar a los agentes de menores ingresos en el área de la docencia y de la salud, entre ellos a los que perciben menos de 200 balboas mensuales. Además, se comprometió con el CONEP a profundizar las medidas de "austeridad y de combate a la corrupción", así como las que conduzcan a una mayor eficacia en la administración pública, y al efecto propuso la creación de un "comité de probidad administrativa".

La agitación empero, ya está en la calle con la misma fuerza con que se expresó en 1979, en tiempos del presidente Royo. Como entonces, los rumores sobre un golpe de estado cubren Panamá.